

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (REPARTO)

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Ref: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO.**

Demandante: **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ.**

Demandada: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
"COLPENSIONES".**

MARIO ALBERTO TASCON MORENO, mayor de edad, domiciliado en Bugalagrande Valle, identificado con la C.C. 6.199.933, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No.241644 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del señor **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, mayor de edad, de la manera más atenta y respetuosa me dirijo a Usted, para manifestar que presento demanda contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES"** representada legalmente por su presidente **MAURICIO OLIVERA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C, o por quien haga sus veces al momento de la notificación, a fin de que previos los trámites procesales previstos en la ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para el proceso ordinario, y en ejercicio de la acción de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se provea favorablemente las pretensiones del presente libelo.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

De conformidad con el artículo 164-1-c, de la ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no es necesaria la Conciliación Extrajudicial por tratarse de derechos "no susceptibles de conciliación", directriz trazada en la jurisprudencia del H. CONSEJO DE ESTADO, según sentencia de la SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "A" Consejero ponente: ALFONSO VARGAS RINCÓN, del primero (01) de septiembre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00817-00(AC).

LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES:

En cumplimiento del artículo 162-1 de la ley 1437, las partes en este proceso son:

ACTOR: OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, con c.c 16.350.760 debidamente representado por su apoderado, conjugándose así la capacidad jurídica procesal y de postulación.

DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES" representada legalmente por su presidente **MAURICIO OLIVERA**, o quien haga sus veces.

PRETENSIONES

PRIMERA: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución GNR 193207 del 26 de junio de 2015, radicada al No 2014-7875899, que resuelve el recurso de reposición y revoca la resolución GNR 298207 de agosto de 2014, proferida por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, mediante la cual dicha entidad reconoció la pensión mensual de vejez a mi representado con base al salario percibido en los últimos 10 años de servicio en cuantía de \$2.298.750, con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio, sin incluir la totalidad de los factores devengados, en cuanto dejó de incluir todos los constitutivos de salario producidos durante el año anterior a su causación, y sin aplicar la norma más favorable, esto es, no teniendo en cuenta el reconocimiento del régimen especial de la Rama Judicial a que tenía derecho, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978¹, esto es, con el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada.

SEGUNDO: DECLARAR que es NULA la resolución No VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015, proferida por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, mediante la cual la parte demandada al resolver la complementación y/o adición al el recurso de reposición y apelación confirma en todas y cada una de sus partes la resolución No.GNR 193207 del 26 de junio de 2015, con la cual se revocó la resolución No 298207 del 26 de agosto de 2014.

TERCERO: DECLARAR que mi poderdante OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, a TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, tiene derecho a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” proceda a LIQUIDAR su pensión de vejez de conformidad con los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, esto es, con el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio y teniendo en cuenta asignación básica, prima de antigüedad, las doceavas partes de los demás factores salariales devengados a la fecha de presentación de la solicitud a saber: La doceava de Bonificación de servicios, la doceava de prima de servicios, la doceava de prima de productividad, la doceava de subsidio de alimentación, la doceava de incremento, la doceava de prima de vacaciones, la doceava de prima de navidad lo cual nos arrojará la cuantía legal de pensión efectiva a favor de mi patrocinado.

CUARTO: Que la entidad demandada estará obligada a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado en el artículo 192, inc 1° de la ley 1437 de 2011.

QUINTO: De no acatarse por parte de la entidad demandada el fallo, dentro del término legal, esta deberá reconocer y pagar a la demandante, los intereses moratorios que se causen en consonancia con lo dispuesto en el artículo 192, inc 3° de la ley 1437 de 2011.

¹Decreto que regula entre otros aspectos la escala de remuneración correspondiente a los cargos para los funcionarios y empleados de la Rama judicial y el Ministerio Publico y fija factores que constituyen salario.

4

SEXTO: Condenar en costas a la parte demandada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011.

Las anteriores pretensiones tienen como fundamento la narración histórica de los siguientes:

HECHOS

1.- Mi mandante **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIÉRREZ**, ha laborado al servicio de la Rama Judicial en calidad de empleado judicial desde el 21 de agosto de 1976, hasta la fecha.

2. Mi poderdante **SOLANO GUTIÉRREZ**, nació el día 27 de febrero de 1958, actualmente cuenta con 58 años, por ende cumplió su status jurídico de pensionado el 27 de febrero de 2013.

3. Mi prohijado **OSCAR HUMBERTO**, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, por lo cual ésta entidad, una vez interpuesto el recurso de reposición y apelación por parte de mi patrocinado ordenó dicho reconocimiento mediante la resolución No. GNR 193207 del 26 de junio de 2015, revocando en todas y cada una de sus partes la resolución No. GNR 298207 fechada 26 de junio de 2015, con base al salario percibido en los últimos 10 años de servicio en cuantía de \$2.298.750, con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio.

4. **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, mediante escrito adiado 30 de septiembre de 2015, complementó y/o adicionó el recurso de reposición y subsidiariamente apelación contra la resolución No. GNR 193207 del 26 de junio de 2015, en el entendido que el ingreso base de liquidación no se realizó de conformidad con la aplicación concreta del artículo 6° del decreto 546 de 1971 como el artículo 12 del decreto 717 de 1978, al haberse omitido ingresar la totalidad de los factores salariales a que tiene derecho.

5. No obstante lo anterior la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, por medio de resolución No VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015, confirmó en toda y cada una de sus partes la resolución No. 193207 del 26 de junio de 2015 mediante la cual se revocó la resolución No 298207 del 26 de agosto de 2014, justificando su posición, basados en la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015 proferida por parte de la Honorable Corte Constitucional, en el entendido que el régimen de transición se conservará únicamente respecto a edad, monto y semanas de cotización, más no sobre el ingreso base de liquidación. Posición que fue adoptada por dicha entidad a través de Circular Interna No 16 del 2015 y concepto jurídico No BZ 2015-8406686 del 9 de septiembre de 2015, por tanto, según el extremo demandado, la normatividad aplicada para su reconocimiento tiene asidero en lo plasmado en el inciso 3° del artículo 36 y 21 de la ley 100 de 1993, por ello, el recurso el recurso de adición presentado por mi patrocinado en el sentido que se diera aplicación a

artículo 6° del decreto 546 de 1971 como el artículo 12 del decreto 717 de 1978 se tornaba improcedente.

6 **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIÉRREZ**, nació el día 27 de febrero de 1958, e inició a trabajar el día 21 de agosto de 1976 por lo cual al primero (1) de abril de 1994 ya había laborado más de 15 años, es decir cumplía a cabalidad con uno (1) de los requisitos para ser beneficiario del REGIMEN de TRANSICIÓN contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, como lo era el TIEMPO DE SERVICIO.

7. **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, al encontrarse cobijado por el Régimen de Transición de la ley 100 de 1993, le corresponde la aplicación del decreto 546 de 1971, contentivo del régimen especial de la Rama Judicial normativa que se debe aplicar de manera completa, pues decisión en contrario, implicaría el desconocimiento de INESCINDIBILIDAD DE LA NORMA, tantas veces decantado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

8. **OSCAR HUMBERTO SOLANO**, ha trabajado más de 20 años de servicios continuos, posteriores a la vigencia del decreto 546 de 1971, los cuales todos han sido en la Rama Judicial, es decir supera en exceso el mínimo establecido (10 años) por lo tanto tiene derecho a que se le dé aplicabilidad al mismo, y en igual sentido, al decreto 717 de 1978, normatividad esta, que ordena que, la liquidación de la pensión de jubilación deberá efectuarse al equivalente al 75% de la asignación básica más elevada que hubiere devengado en el último año (artículo 6° del decreto 546 de 1971), incluyendo la asignación básica mensual fijada por Ley para el empleo y todas las sumas que habitual o periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios. (Artículo 12 decreto 717 de 1978), por lo mismo, y conforme a la certificación de los factores salariales expedidos por el empleador, los factores base para la liquidación son:

- 8.1 Asignación básica.
- 8.2 Prima de antigüedad,
- 8.3 1/12 Bonificación de servicios.
- 8.4 1/12 Prima de servicios.
- 8.5 1/12 Prima de productividad.
- 8.6 1/12 De subsidio de alimentación
- 8.7 1/12 De incremento
- 8.8 1/12Prima de vacaciones
- 8.9 1/12 Prima de navidad

9. Teniendo en cuenta todos los factores de salario devengados a la fecha en que cumplió su status jurídico (27-02-2013) y conforme a lo prescrito en los decretos decreto 546 de 1971 y 717 de 1978 se debe liquidar la pensión a favor de **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, de la siguiente manera:

Asignación básica. 2013-----	\$1.142.531.00
Prima de antigüedad 2013-----	\$1.713.169.00
1/12 Bonificación de servicios 2013-----	\$ 118.987.00

1/12 Prima de servicios 2012-----	\$ 127.533.33
1/12 Prima de productividad 2012-----	\$ 121.814.00
1/12 De subsidio de alimentación 2013-	\$ 45.079.00
1/12 De incremento 2.5% 2013-----	\$ 22.758.00
1/12Prima de vacaciones 2012-----	\$ 142.903.91
1/12 Prima de navidad 2012-----	\$ 295.835.00
	<hr/>
	\$ 3.730.609.00

TOTAL INGRESO SALARIO BASE \$ 3.730.610.24

MONTO DE PENSIÓN (\$3.730.610.24 x 75%)= 2.797.957.68

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

10. Con lo anterior la actuación administrativa relativa a los recursos previstos en la ley fue consumada la vía gubernativa, por lo que es procedente la reclamación por vía contenciosa.

11. El sitio de labores donde presta mi poderdante los servicios es el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de la Ciudad de Buga, Valle, encontrándose aún activo, por ende los Juzgados Administrativos de dicha localidad son los competentes para conocer de éste asunto.

NORMATIVIDAD VIOLADA

Considero que con la negativa de la liquidación conforme a derecho de la pensión de vejez de mi poderdante se están violando las siguientes normas:

Constitucionales: Artículos 2, 5, 13, 23, 29, 48, 53 y 150; Legales: Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, ley 100 de 1993: Artículo 36 y 288 de la ley 100 de 1993, ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY COMO CAUSAL DE NULIDAD

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, en los **actos administrativos contentivos en las resoluciones No GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015**, al reconocer la **PENSION DE JUBILACIÓN** a favor de **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, con base al salario percibido en los últimos 10 años de servicio en cuantía de \$2.298.750, no teniendo en cuenta decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, basados en la interpretación errónea realizada a través de Circular Interna No 16 del 2015 y concepto jurídico No BZ 2015-8406686 del 9 de septiembre de 2015 de la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, viola el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, así mismo trasgrede los artículos 36 -Régimen de Transición-, y 288 de la ley

2

100 de 1993 y por consiguiente deja de aplicar los mencionados decretos para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a que tiene derecho mi prohijado con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio en que se causó su status jurídico de pensionado.

Sobre los alcances de la sentencia No SU-230 del 2015 proferida por parte de la Honorable Corte Constitucional, el Consejo de Estado, recientemente, en Sentencia de Unificación proferida el 25 de febrero de 2016, fijó su posición con respecto a la referida sentencia de la Corte Constitucional, estableciéndose en ésta que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%), y la única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de los congresistas y asimilados, regidas por la ley 4º de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013, pues conforme a la parte resolutive de la referida sentencia de control constitucional, “las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de éste régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36 del inciso tercero, de la ley 100 de 1993, según el caso”. (Subrayas propias)

Ello quiere decir que tal circunstancia no era aplicable a mi patrocinado, pues dicho fallo no se extiende a los regímenes pensionales regulados en otras normas, sino a las pensiones de los congresistas y asimilados, tal y como se señaló expresamente por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, cuando sobre el particular refiere “.. En consecuencia, lo que esta Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados...”. Con todo lo anterior para el caso que aquí se demanda el tenemos que el extremo pasivo no solo desconoce la posición asumida por el Consejo de Estado a través de múltiples sentencias, sino el mandato Constitucional consignado en el artículo 48 Superior, en el sentido de no respetarle a **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, las normas especiales contenidas en los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, para efectos de la liquidación de su Pensión de Jubilación con todos los factores componentes salario devengado en el año en que cumplió su status jurídico de pensionado, normas estas que son aplicables a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, que se encuentren en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; precisamente el yerro en la interpretación de la sentencia y desconocimiento de la posición asumida por parte del Consejo de Estado conllevó a la NO APLICACIÓN INTEGRAL de los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, que eran aplicables en su integridad al señor OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIÉRREZ.

De esta forma, el artículo 48 de la Constitución Política, Prescribe:

ARTICULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA:

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

Incisos y párrafos adicionados por el Acto Legislativo 01 de 2005:...

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos...

Parágrafo transitorio 2°. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los párrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.....

Parágrafo transitorio 4°. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014...

El mandato constitucional es sumamente claro en determinar que, el régimen de Transición establecido en la ley 100 de 1993 y las normas que lo desarrollan no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente del Acto Legislativo 01 de 2005, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

El señor **OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ**, al nacer el día 27 de febrero de 1958 e iniciar a trabajar el día 21 de agosto de 1976, se encontraba cobijado por el Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues al primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro 1994, tenía más de 15 años de servicio, por ende para efectos de la Reliquidación de su Pensión de Jubilación se le **APLICAN EN SU INTEGRIDAD**, las normas anteriores que cobijan a los funcionarios y empleado de la RAMA JUDICIAL, estas son el decreto 546 de 1971 y 717 de 1978; de esta forma se determina que se consolidó el derecho a la pensión con anterioridad al año 2014, por contar con más de la 750 semanas cotizadas y su equivalente en tiempo de servicio a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005.

Bajo esta perspectiva se concluye que La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES"**, en las resoluciones GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015, al reconocer la pensión de jubilación a **OSCAR HUMBERTO SOLANO**

GUTIERREZ, de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 o artículo 21 de la ley 100 de 1993, basados en la interpretación errónea realizada a través de Circular Interna No 16 del 2015 y concepto jurídico No BZ 2015-8406686 del 9 de septiembre de 2015 de la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, y no tener en cuenta los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, en favor del mismo, desconoció la ley, ya que está aplicando la normatividad que no corresponde, pues conforme se demuestra, mi poderdante al primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), tenía más de quince (15) años de servicio, circunstancia esta que implica que de manera automática se le debe aplicar en su integridad en los efectos de la liquidación de su pensión de jubilación los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.

De igual forma, la entidad accionada desconoce la ley por vía de omisión, al olvidar la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio, son: ASIGNACIÓN BASICA, PRIMA DE ANTIGUEDAD, las doceavas partes de los demás factores salariales devengados a la fecha de presentación de la solicitud a saber: La doceava de BONIFICACIÓN DE SERVICIOS, la doceava de PRIMA DE SERVICIOS, la doceava de PRIMA DE PRODUCTIVIDAD, la doceava de SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, la doceava de INCREMENTO, la doceava de PRIMA DE VACACIONES, la doceava de PRIMA DE NAVIDAD.

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, está desconociendo el régimen de Transición de la ley 100 de 1993, lo que significa que debió proceder a liquidar la pensión de jubilación de mi poderdante con fundamento en la siguiente normatividad: decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, por consiguiente la referida liquidación ES SOBRE LOS FACTORES DEVENGADOS Y CERTIFICADOS EN EL ULTIMO AÑO A LA FECHA EN QUE CUMPLIÓ STATUS JURIDICO DE PENSIONADO.

La negativa de liquidar en legal forma, como ya se explicó y manifestó con suficiencia, no solo va en contravía de la norma, sino que, desconoce PRINCIPIOS DE ORDEN SUPERIOR, como lo es la IGUALDAD, LA EQUIDAD Y FAVORABILIDAD, consagrada en la constitución política en los artículos 13 y 53.

El principio del derecho administrativo consiste en que “LOS ERRORES DE LA ADMINISTRACIÓN NO LOS PUEDE PAGAR LOS ADMINISTRADOS”, mi mandante está pagando dichos errores, tanto por NO haberse incluido todos los factores devengados en forma correcta, como por haber interpretado en forma errónea el Régimen de Transición, circunstancias que llevaron a la entidad a negar la pensión de jubilación de conformidad con los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior a la solicitud, que legalmente le corresponden a OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIÉRREZ. En estas circunstancias COLPENSIONES, está interpretando las normas que regulan las pensiones en FORMA RESTRICTIVA, y con un criterio único que no se entiende en su aplicación y que recientemente a través del proveído del 25 de febrero 2016, fue nuevamente clarificado.

Pues bien, las normas anteriores que se deben aplicar a mi mandante de acuerdo al Régimen de Transición de la ley 100 de 1993, son:

DECRETO 546 DE 1971, en su artículo 6° establece:

“ARTICULO 6° Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.”

DECRETO 717 DE 1978, en su artículo 12 establece:

“ARTÍCULO 12. DE OTROS FACTORES DE SALARIO. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

- a) Los gastos de representación.
- b) La prima de antigüedad.
- c) El auxilio de transporte.
- d) La prima de capacitación.
- e) La prima ascensional.
- f) La prima semestral.
- g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”.

Teniendo en consideración que las normas aplicables para el presente caso, son los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, es menester aclarar, así también, que en providencia del 6 de mayo de 2015, el Consejo de Estado decidió el recurso de apelación en contra de la sentencia del 18 de julio de 2013 proferida por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, con radicación interna No 23001 23 33 000 2012 00132 01, donde aparece como actor la señora AURA ESTHER HERRERA RUIZ y demandada LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE EN LIQUIDACION, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL “UGPP”, confirmando la sentencia en cuyos apartes más relevantes consignó:

“...En este orden de ideas, la asignación mensual más elevada para determinar la base de la pensión de jubilación en el régimen especial de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público incluye la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente excluido por la ley.

A los funcionarios judiciales y del ministerio público que se encuentran en la transición establecida en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, les es aplicable en forma integral el régimen anterior, que para el efecto es el

régimen especial regulado en el Decreto 546 de 1971, pues de no hacerse un análisis que prohíje un examen integral del citado régimen, conduciría a una interpretación sesgada del artículo 36 de la citada ley, el cual llevaría, sin duda alguna, a desconocer imperativos constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, como es la inescindibilidad de las normas jurídicas, el respeto de los derechos adquiridos y el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la C.P.

Es así que la demandante tiene derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, y a considerarse como factores salariales todas las sumas que habitual y periódicamente percibió como retribución de sus servicios, con base en el régimen especial que la cobija, en atención a lo dispuesto en los artículos 6 del decreto 546 de 1971 y 12 del decreto 717 de 1978.

Por las anteriores razones, no resultan de recibo para la Sala los argumentos de la entidad demandada, en cuanto señalan que para establecer la base de liquidación de la pensión de jubilación debe acudirse a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 junto con sus decretos reglamentarios, pues aceptar tal argumentación desvirtuaría la especialidad del régimen...”

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, citó como normas aplicables el inciso 3º del artículo 36 o artículo 21 de la ley 100 de 1993, basados en la interpretación errónea realizada a través de Circular Interna No 16 del 2015 y concepto jurídico No BZ 2015-8406686 del 9 de septiembre de 2015 de la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015 desconociendo a demás de la múltiples providencias decantados por el Consejo de Estado, los derechos adquiridos de mi mandante y las normas que le son aplicables, es decir, viola las normas anteriores.

Si la nueva ley ENTREGA UN DERECHO a los afiliados que se encuentran en una expectativa en adquirir en un futuro la pensión de jubilación, la entidad de previsión encargada de reconocer y liquidar la prestación viola el derecho adquirido que da dicha norma, concretamente como lo ha denominado el legislador EL REGIMEN DE TRANSICIÓN.

Queda demostrado que La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”** viola la Ley aplicable y es causal de **NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO**.

FALSA MOTIVACIÓN COMO CAUSAL DE NULIDAD:

Señor (a) Juez, como se ha indicado en ésta demanda, al señor OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, para efectos de la liquidación de su pensión de jubilación, COMO EMPLEADO DE LA RAMA JUDICIAL, le corresponde la aplicación de los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978; pese a ello, La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, en desconocimiento de los antecedentes de hecho y derecho aplicables al caso, motiva falsamente las resoluciones **No.GNR**

193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015 al reconocer la liquidación pensional a favor de mi patrocinado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 o artículo 21 de la ley 100 de 1993, basados en la interpretación errónea realizada a través de Circular Interna No 16 del 2015 y concepto jurídico No BZ 2015-8406686 del 9 de septiembre de 2015 de la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, y negarse a dar aplicabilidad a los decretos 546 de 1971 y 12 del decreto 717 de 1978, que indican que esto se debe realizar con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

La falsa motivación es causal de nulidad de la actuación administrativa demandada.

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, motiva falsamente las resoluciones No.GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015, pues las circunstancias de HECHO Y DERECHO, consignadas en estos actos administrativos, no son aplicables a mi mandante, pues los verdaderos fundamentos de hecho y de derecho que debió contener las resoluciones impugnadas hacen relación a la APLICACIÓN INTEGRAL de la normatividad citada (546 de 1971 y 12 del decreto 717 de 1978) para efectos de proceder a liquidar la pensión de jubilación con todos los factores componentes de salario y devengados en el año en que cumplió el status jurídico de pensionado (2013).

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, no acepta que mi mandante OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, se encuentra cobijado en su totalidad por el Régimen de Transición de la ley 100 de 1993 y motiva falsamente las resoluciones GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015, de las cuales se solicita la nulidad, porque aplica la ley 100 de 1993 art 36 y 21, norma que, como ya se manifestó hasta el cansancio no es aplicable a mi mandante de conformidad con lo citado en la sentencia de Unificación proferida el 25 de febrero de 2016 por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo.

Bajo esta perspectiva, el desconocimiento por parte de La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” del antecedente factico de que mi mandante al primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), tenía más de quince (15) años de servicio, uno de los requisitos contemplados, lo cual le da derecho al Régimen de Transición de la ley 100 de 1993, y aunado al hecho de que, la anterior situación automáticamente implica la aplicación de la normatividad anterior para efectos de la liquidación pensional, postulado que también fue desconocido, necesariamente conlleva a que las resoluciones GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015 sean ANULADAS, y por ende retiradas del ordenamiento jurídico, pues mantenerla incólume implicaría la violación perpetua de los derechos fundamentales de mi mandante.

En suma no se entiende como La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, desconoce los fundamentos de hecho y derecho que obran en el expediente administrativo, y hacen relación a la

certificación expedida por el empleador, en la que se observan y certifican los siguientes factores salariales devengados por OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, en el último año previo a la solicitud: Asignación básica, Prima de antigüedad, 1/12 Bonificación de servicios, 1/12 Prima de servicios, 1/12 Prima de productividad, 1/12 De subsidio de alimentación, 1/12 De incremento 2.5%, 1/12 Prima de vacaciones, 1/12 Prima de navidad, Por lo mismo, no es admisible que la entidad demandada pese a que OBRAN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO los factores antes reseñados, decida arbitrariamente NO reconocer todos los factores salariales debidamente certificados y devengados en el año en que se cumplió su status jurídico (2013) previa solicitud.

Con la actuación realizada por la entidad demanda, se transgreden las normas sustanciales laborales y de un derecho sustancial de carácter pensional que debe ser reconocido y pagado en su totalidad, pues al ser beneficiario del Régimen de Transición, este tiene el carácter de derecho adquirido y la entidad demandada al reconocer la pensión de vejez a favor de mi pupilo con base en el salario percibido en los últimos 10 años de servicio, sin incluir la totalidad de los factores devengado de conformidad con lo estatuido en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978 desconoció abiertamente la Jurisprudencia de los Altos Tribunales y en especial la del Consejo de Estado (No obstante haberse citado en los recursos interpuestos), contrariando así preceptos superiores, por lo que los actos demandados no tienen legalidad, lo que lógicamente exige la reparación de los perjuicios y daños generados, en consecuencia se deberán acoger las pretensiones de la demanda.

PRUEBAS

Solicito a su Señoría se decreten y admitan las siguientes:

DOCUMENTALES:

- 1.- Resolución GNR 298207 de agosto de 2014, que negó la pensión de vejez al señor OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ.
- 2.- Resolución GNR 193207 del 26 de junio de 2015, radicada al No.2014-7875899, que resuelve el recurso de reposición y revoca la resolución GNR 298207 de agosto de 2014.
- 3.- Resolución No.VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015, proferida por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, mediante la cual la demandada confirma en todas y cada una de sus partes la resolución No.GNR193207 del 26 de junio de 2015, mediante la cual se revocó la resolución No 298207 del 26 de agosto de 2014.
- 4.- Copia de CERTIFICADOS DE FACTORES SALARIALES devengados el año en que se cumplió el status jurídico del señor OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ.

5. Copia del escrito con el que se interpuso los recursos de reposición parcial y en subsidio de apelación fechado 23 de julio de 2015, contra la Resolución GNR 193207 del 26 de junio de 2015.

6.- Copia del escrito de complementación o adición fechado 30 de septiembre de 2015 al recurso de reposición y subsidiariamente de apelación contra la resolución GNR 193207 del 26 de junio de 2015.

PETICIÓN ESPECIAL:

En aplicación de lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 175 de la ley 1437 de 2011 solicito a su señoría que en el auto ADMISORIO DE LA DEMANDA, se le indique a la entidad demandada de la obligación que le asiste de aportar con la contestación de la demanda EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO de mi poderdante OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, y que contiene los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso con la debida constancia de notificación y ejecutoria de las resoluciones GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015.

OFICIOS:

De NO verificarse lo establecido en la petición anterior, respetuosamente solicito al señor Juez, se digne oficiar a COLPENSIONES, en la avenida del milagroso calle 4 con carrera 19 esquina de Guadalajara de Buga Valle, a fin de que remita fotocopia autentica de todo el expediente administrativo del pensionado OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.350.760 de Tuluá Valle con la debida constancia de notificación y ejecutoria de las resoluciones GNR 193207 del 26 de junio de 2015 y la VPB 61059 del 14 de septiembre de 2015.

CUANTÍA:

La cuantía está regulada por lo ordenado en el inciso final del artículo 157 de la ley 1437 de 2011.

Teniendo en cuenta que mi pupilo aún se encuentra activo al servicio de la Rama Judicial en su calidad de Secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de Buga, sin que se hubiere producido el retiro, estimo razonadamente la cuantía en el valor de la pensión solicitada que equivale a la suma de \$2.797.957.68.

Total cuantía.....\$2.797.957.68

COMPETENCIA:

Es competencia del Juzgado a su cargo, por la naturaleza de la Acción, por razón del territorio donde el actor realizo la reclamación, pues el lugar de prestación del servicio del señor OSCAR HUMBERTO SOLAÑO, lo es el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de Buga, Valle, y por

la cuantía que se deriva de la misma, la cual se determinó en forma razonada. Artículo 156, numeral 3° de la ley 1437 de 2011.

NOTIFICACIONES PERSONALES

La DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES en la Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 11-, y correo electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.

El DEMANDANTE: OSCAR HUMBERTO SOLANO GUTIERREZ, en su lugar de trabajo Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de Buga, Valle, edificio Condado Plaza piso 4 oficina 407, o en su residencia ubicada en la carrera 37 No 20-45 de la ciudad de Tuluá, Valle, abonado celular 3164020199 y correo electrónico oshsol@gmail.com

El suscrito en la secretaria del despacho o en mi oficina de la calle 5 No.2-81 de Bugalagrande, Valle o en el correo electrónico mario2954@hotmail.com.

ANEXOS:

- 1.- Cuatro (2) copias de la demanda con sus anexos para los traslados de rigor.
- 2.- Una copia de la demanda con sus anexos para el archivo del Juzgado.
- 3.- Cutro (4) CD que contiene la demanda en formato PDF
- 4.- Los documentos aducidos en el acápite de pruebas.
- 5.- El poder para actuar.

Del señor (a) Juez,

Cordialmente

MARIO ALBERTO TASCÓN MORENO
C.C 6.199.1933 de Bugalagrande Valle
T.P No 241644 C. S. J.